

ONOMASTICA ROMANA E STATO GIURIDICO

Hispania e Nord Italia a confronto: alcuni casi di studio



«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITÀ

STUDI MISCELLANEI

43 Nuova Serie, 3

Comitato scientifico

Giorgio Piras (Direttore)

Maria Teresa D'Alessio

Roberto Nicolai Mastrofrancesco

David Nonnis

ONOMASTICA ROMANA E STATO GIURIDICO

Hispania e Nord Italia a confronto: alcuni casi di studio

Atti del Seminario Internazionale
Universidad Complutense de Madrid (6-7 marzo 2023)

ONOMÁSTICA ROMANA Y ESTATUTO JURIDICO

Hispania y Norte de Italia: algunos casos de estudio

Actas del Seminario Internacional
Universidad Complutense de Madrid (6-7 de marzo de 2023)

a cura di

GIAN LUCA GREGORI - ESTELA GARCÍA FERNÁNDEZ

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
Roma - Bristol (USA)

Onomastica romana
e stato giuridico

a cura di
Gian Luca Gregori - Estela García Fernández

© Copyright 2025 «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Via Marianna Dionigi, 57 - 00193 Roma - Italia
<http://www.lerma.it>
lerma@lerma.it

70 Enterprise Drive, Suite 2
Bristol CT, 06010 - USA

Progetto grafico:
«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Impaginazione e Copertina
Rossella Corcione

In copertina:
Stele di Atta Altica Auniae f.
(Museo de Burgos @ J. Gómez-Pantoja, M. Rodríguez Ceballos)

Sistemi di garanzia della qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Sistemi di gestione ambientale
ISO 14001:2015

Tutti i diritti riservati. Testi ed illustrazioni vietati alla riproduzione
senza autorizzazione scritta dell'editore.

Onomastica romana e stato giuridico / Gian Luca Gregori - Estela García Fernández
(a cura di). - Roma : «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2025. - 184 p., ill. ; 22 cm.
(Studi Miscellanei 43; Nuova Serie, 3)

ISBN 978-88-913-3475-6 (brossura)

ISBN 978-88-913-3478-7 (PDF)

DOI: 10.48255/9788891334787

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELL'ANTICHITÀ



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

INDICE

ESTELA GARCÍA FERNÁNDEZ (Universidad Complutense de Madrid) –

GIAN LUCA GREGORI (Sapienza Università di Roma)

Introducción » VII

PARTE PRIMA – NORD ITALIA

CARLOS M.^a SÁNCHEZ-MORENO ELLART (Universidad de Valencia)

Quintus Mucius Scaevola and the *lex Pompeia de Transpadanis*. A debatable but plausible relationship » 3

FULVIA MAINARDIS (Università di Trieste)

La registrazione dell'onomastica personale per *novi cives e peregrini* nella prassi amministrativa romana. » 17

ELENA CIMAROSTI (Università di Genova)

Dal formulario idionimico al formulario trinominale nella *IX regio (Liguria)* » 37

FRANCO LUCIANI (Università di Urbino Carlo Bo)

Fra Veneti, Celti, Reti e Romani: casi di commistione onomastica nel *Venetorum ager* » 57

ROMEO DELL'ERA (Université de Lausanne) – GIAN LUCA GREGORI (Sapienza Università di Roma)

Onomastica indigena o romana? Qualche caso “problematico” fra Benaco (*regio X*) e Verbano (*regio XI*) » 81

PARTE SECONDA – HISPANIA

ESTELA GARCÍA FERNÁNDEZ (Universidad Complutense de Madrid)

Si quis municeps ... qui Latinus erit (Irni 28). Cuestiones en torno a la onomástica latina provincial » 95

PEDRO LÓPEZ BARJA DE QUIROGA (Universidad de Santiago de Compostela)

Sobre latinos y junianos. » 109

BORJA MARTÍN CHACÓN (Universidad de Barcelona)

Sobre la onomástica latina de los ilerdenses del Bronce de Áscoli: viejas y nuevas hipótesis
sobre su condición jurídica. » 119

HENAR GALLEGU FRANCO – GABRIEL GÓMEZ MARTÍN (Universidad de Valladolid)

Onomástica, municipalización y derecho latino: los dobles idionimos en *Nova Augusta*
(Lara de los Infantes, Burgos) » 133

ENRIQUE MELCHOR GIL (Universidad de Córdoba)

Algunos tempranos testimonios de la condición jurídica peregrina, latina y romana y su reflejo
en la onomástica de las élites de las comunidades cívicas de la *Hispania Ulterior Baetica* . . . » 145

ENRIQUE PAREDES MARTÍN (Universidad Complutense de Madrid)

El *nomen Flavius* en la antroponimia lusitana: ¿reflejo onomástico de la latinización flavia? . . . » 157

INTRODUCCIÓN

Estela García Fernández - Gian Luca Gregori

El presente volumen recoge las contribuciones presentadas por diversos investigadores italianos y españoles a un seminario internacional celebrado en la Universidad Complutense de Madrid en marzo del año 2023¹.

El seminario se planteó desde una perspectiva jurídica en la idea de que no debería ser disociado el análisis onomástico del estatuto cívico de la población. Se entiende, lógicamente, que esta relación es con frecuencia problemática y no puede establecerse de manera mecánica ni descontextualizada. Como se refleja en muchas de las contribuciones, las dificultades para que converjan el dato jurídico y la onomástica derivan generalmente de las características de un registro epigráfico donde la pervivencia y vitalidad de las tradiciones onomásticas indígenas y sus diversas variantes, impiden atribuir un estatuto cívico preciso a buena parte de la población, como es el caso de la epigrafía del norte de Italia. Una situación inversa, pero no menos compleja, presenta Hispania. El alto nivel de romanización que documentan muchas ciudades de derecho latino, especialmente en la provincia Bética, impide, sin embargo, que se pueda identificar el uso de estructuras trinominales con la posesión de ciudadanía romana. El motivo no es otro que el uso por parte de la población latina del mismo sistema de denominación que utiliza la población romana (excepto la *tribus*). En uno y otro caso, bien por indigenismo, bien por romanidad, la identificación estatutaria de la onomástica es problemática o simplemente fracasa. En cualquier caso, el hecho de que esta dificultad no pueda ser despejada no es motivo para que sea pasada por alto pues con ello se compromete la adecuada comprensión de los complejos procesos de integración. A este planteamiento responden las contribuciones presentes en la publicación que el lector tiene en sus manos.

Asimismo, la idea de comparar, a través de algunos estudios de caso, la onomástica de territorios aparentemente dispares como es el norte de Italia e Hispania no fue producto del azar académico. Ambos territorios tienen un vínculo común en el derecho latino. La integración de la Galia Cisalpina, salvando las colonias romanas o los municipios surgidos al amparo de la *lex Iulia de civitate*, no se produjo en un primer momento a través de la ciudadanía romana, sino mediante la concesión general de un nuevo derecho incorporado a la latinidad y conocido como *ius Latii*. Su concesión al norte de Italia en el año 89 a.C. de la mano de Pompeyo Estrabón, a través de una *lex Pompeia de Transpadanis* en denominación moderna, será seguida por la concesión de ciudadanía romana en el año 49 a.C. y la pérdida, casi inmediata, de la condición provincial de la Galia Cisalpina. Si para esta provincia la *lex Pompeia* supuso un primer paso en su integración, para Hispania esta ley es de la mayor importancia porque de este nuevo expediente latinizador, que va a permitir a las oligarquías de las ciudades acceder a la ciudadanía romana desempeñando una magistratura en sede local, deriva directamente el municipio de derecho latino. Esta última condición adminis-

¹ La celebración de este seminario (6-7 de marzo de 2023) fue posible gracias a los fondos de los proyectos de investigación PID2019-105940GB-I00. Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España; y *AVIPES* CM H2019/HUM5742. Comunidad de Madrid. Grupo de Investigación UCM *Ciudades Romanas* (CIR).

trativa será la que posean las ciudades hispanas desde Augusto y, especialmente, desde los emperadores flavios en adelante. Es cierto que este derecho tiene diferentes actualizaciones y cronologías, pero es evidente que surgió como una eficaz fórmula para integrar territorios donde la vitalidad del mundo indígena no hacía recomendable la concesión de ciudadanía romana, tanto en la Galia Cisalpina como en Hispania. La provincia Bética sería la única excepción.

Este es el contexto en el que se enmarcan las contribuciones del presente volumen. Advertimos que no se ha tratado en ningún caso de realizar tratamientos exhaustivos de la documentación, sino de señalar nuevas vías de trabajo, problemas relevantes o cuestiones con una incidencia significativa en el análisis jurídico del registro onomástico.

El volumen, como puede observar el lector, se divide en dos secciones que se corresponde con los dos ámbitos territoriales de estudio: Italia del norte e Hispania. En coherencia con el marco histórico del volumen, la sección correspondiente a Italia se inicia con una primera contribución a cargo de Carlos M.^a Sánchez-Moreno Ellart, *Quintus Mucius Scaevola and the lex Pompeia de Transpadanis. A debatable but plausible relationship*. Esta contribución no pretende proporcionar una visión exhaustiva de la *lex Pompeia*, por otro lado ya realizada por diversos autores, sino indagar, a pesar del carácter inevitablemente especulativo de la empresa, en la posible intervención del jurista Quinto Mucio Escévola en la confección de la ley, desarrollando una idea planteada por G. Lurschi. A su vez, Fulvia Mainardis proporciona el marco metodológico general de análisis en el que ha de encuadrarse la relación entre onomástica y estatuto jurídico. Su contribución, *La registrazione dell'onomastica personale per novi cives e peregrini nella prassi amministrativa romana*, analiza desde una perspectiva global y diacrónica el procedimiento administrativo de adquisición de onomástica romana y su registro oficial hasta donde la fragmentaria documentación lo permite. La autora insiste en el valor declarativo del *nomen* en diversos ámbitos de funcionamiento del estado, tanto civil como militar, y abunda en la idea de no trivializar las formas de denominación y de no disociarlas del estatuto jurídico (con independencia de las falsificaciones o usurpaciones onomásticas que hubieran podido tener lugar, algunas documentadas). Sus conclusiones tienen un gran interés instrumental para el estudio de la onomástica romana de ámbito provincial, como es el caso de Hispania, donde ha tenido especial arraigo la idea de la *imitatio* onomástica.

Las contribuciones siguientes de esta sección, se centran en el análisis técnico de la onomástica de diferentes *regiones* del área septentrional de Italia poniendo especial atención en la relación entre estatuto jurídico y onomástica que, sin duda, es especialmente problemática en estos territorios.

Este es el caso del trabajo de Elena Cimarosti, *Dal formulario idionimico al formulario trinominale nella IX regio (Liguria)*. La autora presenta un detallado dossier de la compleja onomástica de la Liguria (siglos II a.C.-II d.C.) articulado en función de las ocho estructuras onomásticas identificables en la epigrafía de la zona. La modesta cantidad documental del dossier epigráfico, la evidente pervivencia y vitalidad de los usos onomásticos indígenas, además de la elevada presencia de epigrafía privada, donde se manifiestan unos usos onomásticos más lábiles (así la probable coexistencia, por ejemplo, de varios sistemas de identificación onomástica especialmente en el seno de las élites locales), previene de extraer conclusiones de carácter general y la necesidad de trabajar caso por caso. Asimismo, Cimarosti desliza la idea de la necesidad de replantear la relación entre el dato jurídico y la onomástica que considera, quizá, más deudora de un planteamiento moderno que de una verdadera preocupación de los *fruitori antichi*. Para ello pone de ejemplo algunos grupos familiares de posición acomodada donde la transmisión de la onomástica indígena puede deberse más al respeto a una tradición gentilicia que al efectivo mantenimiento del status jurídico de *peregrini*.

La contribución de Franco Luciani, *Fra Veneti, Celti, Reti e Romani: casi di commistione onomastica nel Venetorum ager*, toma en consideración diversos casos de interacción onomástica del territorio del Véneto (*regio X*) entre el fondo onomástico local y el romano, reflejo de la incidencia del proceso romanizador en la onomástica de la zona. Se incorpora un dossier de 354 registros epigráficos seleccionados cuyos elementos onomásticos tienen una base prerromana. El estudio concreto del

proceso de evolución onomástica y su adaptación a los usos romanos se analiza a través de tres estudios de caso, *Ateste*, Montebelluna/*Berua* y *Tridentum* (con una cronología entre el siglo II a.C. y la época altoimperial). El autor vincula la desigual evolución onomástica de la zona con procesos administrativos romanos: la descentralización del censo como impulsor de la adaptación onomástica, la tardía municipalización de algunos enclaves como *Berua* o *Tridentum*, o la larga permanencia de algunas comunidades en condición de *adtributio*.

La última contribución de esta sección, *Onomastica indigena o romana? Qualche caso "problematico" fra Benaco (regio X) e Verbano (regio XI)*, corre a cargo de Romeo Dell'Era y Gian Luca Gregori. Ambos autores analizan algunos estudios de caso de *Brixia* (Brescia, *regio X*) y de la Transpadana oriental (*regio XI*) de compleja interpretación y valoración jurídica, a la hay que sumar la concesión de *ius Latii* a algunas *gentes* alpinas incorporadas administrativamente a la Cisalpina. En los casos analizados de epigrafía "anómala" se observa la pervivencia de usos onomásticos locales como viene siendo habitual en la epigrafía del norte de Italia (observable también en epígrafes de ámbito militar donde conviven estructuras onomásticas romanas y peregrinas en una misma familia). La continuidad onomástica que se observa entre la fase céltica y la romana (por ejemplo un 10 % del territorio bresciano documenta onomástica epicórica) cuestionaría el alcance real de la ciudadanía romana concedida a la Galia Cisalpina en el 49 a.C. Sin embargo, en la epigrafía de la zona también es observable el proceso de romanización de la onomástica, por parte de la población autóctona, en la "construcción" de estructuras onomásticas binominales o trinominales con elementos epicóricos, sin que pueda concluirse, hasta la fecha, ninguna valoración jurídica de este proceso.

La sección dedicada a Hispania se articula en torno a la idea de latinidad por ser esta la condición principal de esta provincia y no la romana, además de prestar atención a problemas de diverso signo en relación a la identificación jurídica de la población. Asimismo, se presentan distintos estudios de caso de cada una de las tres provincias hispanas: Ulterior Bética, Citerior Tarraconense y Lusitania.

Las dos primeras contribuciones de esta sección a cargo de Estela García Fernández, *Si quis municeps ... qui Latinus erit* (Irni 28) y de Pedro López Barja de Quiroga, *Sobre latinos y junianos*, se complementan por tener a la condición latina, municipal y juniana, respectivamente, y su expresión onomástica como objeto de análisis. La aportación de García Fernández, se centra en los problemas de identificación estatutaria de la población en un entorno altamente romanizado y mayoritariamente latino, como es el de la provincia Bética. Al contrario de lo que ocurre en los casos analizados del norte de Italia, en esta provincia la identificación estatutaria de la población fracasa, paradójicamente, por un exceso de "romanidad". Dado el uso generalizado del sistema romano de denominación que documenta la Bética, no es posible diferenciar, en ausencia de *tribus* o de otros indicativos de promoción, al individuo romano del latino, puesto que este último también utiliza los *tria nomina*. Esta circunstancia explicaría que en los análisis epigráficos se tienda a nivelar el estatus cívico de la población de los municipios latinos béticos como si todos sus habitantes fueran *cives Romani*, anulando la diversidad estatutaria que oculta el término *Latini*.

Por su parte López Barja de Quiroga analiza los problemas de identificación estatutaria de los latinos junianos, generalmente poco presentes en los análisis onomásticos por su escasa mención en las fuentes literarias y su mayor presencia en las fuentes jurídicas. Dado que estos libertos también utilizan el sistema trinomial de denominación, difícilmente pueden ser identificados en el registro epigráfico, salvo que expresamente se conozca su condición. Por este motivo se les suele pasar por alto al poder ser erróneamente identificados con libertos romanos o libertos latinos municipales. Asimismo, el autor defiende la existencia de una sola condición latina, esto es, la latinidad juniana en relación a la cual parece haberse tallado la latinidad municipal.

La provincia Ulterior Bética es también objeto de análisis en la contribución de Enrique Melchor Gil, *Algunos tempranos testimonios de la condición jurídica peregrina, latina y romana y su reflejo en la onomástica de las élites de las comunidades cívicas de la Hispania Ulterior Baetica*, quien analiza algunos de los primeros testimonios onomásticos conservados en la documentación epigráfica y numismática de la Hispania

meridional con el fin de identificar los diferentes estatutos jurídicos disfrutados (peregrinos, latinos, romanos). En relación a la temprana presencia de onomástica de tipo romano de data republicana que documenta la provincia, como es el caso, por ejemplo, de las acuñaciones monetales de ciudades como *Castulo*, *Obulco* o *Baelo*, entre otros, el autor mantiene una posición escéptica respecto a la posibilidad de que dicha onomástica traduzca una condición jurídica promocionada de los magistrados monetales, considerando más probable que estemos ante procesos de *imitatio* o de emulación onomástica por parte de población peregrina. Entre los casos analizados es de excepcional interés, en un contexto hispano, la documentación epigráfica proporcionada por el denominado sepulcro de los Pompeyos formado por doce urnas funerarias cuya epigrafía permite observar la evolución onomástica de una familia de *Hispani* en torno al cambio de Era. La onomástica de tipo peregrino desaparece del registro epigráfico según avanza el proceso romanizador en la provincia y se reconoce la dificultad de diferenciar a la población latina de la romana en ausencia de tribus u otros indicativos de promoción.

En la Hispania Citerior se encuadra la contribución de Borja Martín Chacón, *Sobre la onomástica latina de los ilerdenses del bronce de Ascoli: viejas y nuevas hipótesis sobre su condición jurídica*, quien centra su atención en el documento conocido como Bronce de Áscoli, que comparte cronología y responsable de la concesión, en este caso de ciudadanía romana, con la *lex Pompeia de Transpadanis*. Esta contribución demuestra el rendimiento metodológico que posee el vínculo entre estatus jurídico y denominación onomástica, a pesar de su frecuente carácter problemático. Tras una detallada revisión historiográfica en la que se descarta tanto la imitación como la anticipación onomástica como factores explicativos de la denominación latina de los tres miembros ilerdenses de la *turma Salluitana*, se concluye que esta sólo es explicable si se considera la condición colonial latina de *Ilerda*. La propuesta se refuerza con una documentada refundación de la ciudad entre los siglos II a.C. y I a.C. que confirma el registro arqueológico, aunque las referencias a este proceso son bibliográficas.

A la circunstancia onomástica de una ciudad de la Hispania Citerior Tarraconense con un perfil romanizador más lábil y presencia de usos onomásticos epicóricos se dedica la contribución, *Onomástica, municipalización y derecho latino: los dobles idionimos en Nova Augusta (Lara de los Infantes, Burgos)*, de Henar Gallego Franco y Gabriel Gómez Martín. La ciudad de Nova Augusta, en realidad un municipio de derecho latino como confirma la referencia a sus instituciones municipales y la presencia de tribus Quirina, registra un elevado número de inscripciones con nombre único y con doble idionimo, a pesar de su condición municipal. Este tipo de esquema onomástico, que tiene un peculiar desarrollo en la onomástica femenina, se explica por la interacción entre el proceso romanizador propio de una comunidad promocionada y la vitalidad de las tradiciones locales de tipo céltico. Será la flexibilidad onomástica inherente a la condición latina la que permita asociar esta peculiar onomástica con el estatus cívico de un *municeps Latinus*.

En la provincia Lusitania se centra el análisis realizado por Enrique Paredes Martín, *El nomen Flavius en la antroponimia lusitana: ¿reflejo onomástico de la latinización flavia?* Tomando pie en el planteamiento principal de este volumen, la relación entre el estatuto jurídico personal y denominación onomástica, el autor analiza el posible vínculo existente entre la concesión general de latinidad a Hispania por Vespasiano y la aparición de *Flavii* en el registro epigráfico. Aunque sorprende el escaso arraigo del *nomen* en la provincia y su presencia en comunidades de la Lusitania no vinculadas necesariamente a los flavios como *Emerita Augusta*, del análisis realizado por el autor se desprende que la mayor parte de los flavios de la Lusitania pueden ser relacionados con la política municipalizadora flavia. Ahora bien, el testimonio de este *nomen* en una determinada comunidad ha de ser entendido como un simple elemento de refuerzo que necesita de otros testimonios más seguros (tribus, magistraturas, órdenes decurionales) para confirmar la condición municipal latina de una determinada comunidad.

Los editores no quisiéramos finalizar esta introducción sin agradecer a Giovannella Cresci Marrone y a M.^a del Rosario Hernando Sobrino sus valiosas observaciones y sugerencias que, sin duda, han mejorado la presente publicación.

Las contribuciones en italiano fueron revisadas por G.L. Gregori, las escritas en inglés y español por E. García Fernández. Como editores del volumen quisiéramos mostrar nuestra gratitud a Enrique Paredes Martín por su competente labor de revisión final del manuscrito.

Por último, quisiéramos también hacer constar nuestro agradecimiento al Dipartimento di Scienze dell'Antichità (Sapienza Università di Roma) por haber aceptado y financiado la publicación de este volumen en la *collana Studi Miscellanei*.

PARTE PRIMA

NORD ITALIA

QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA AND THE *LEX POMPEIA DE TRANSPADANIS*. A DEBATABLE BUT PLAUSIBLE RELATIONSHIP*

Carlos M.^a Sánchez-Moreno Ellart

ABSTRACT

This chapter considers whether Giorgio Luraschi's assertion that the *lex Pompeia de Transpadanis* may have been inspired by the jurist *Q. Mucius Scaevola* is sufficiently well founded. We have to rely on mere circumstantial evidence, for example Scaevola's way of reasoning as a jurist, his previous involvement in the *lex Licinia Mucia* or his possible interest in civic religion in the Latin colonies.

Key-words: *Capitolia*, *Gallia Cisalpina*, *lex Pompeia de Transpadanis*, Quintus Mucius Scaevola, *Transpadana*

INTRODUCTION

In the following lines, we shall discuss a hypothesis put forward by Giorgio Luraschi on the *lex Pompeia de Transpadanis*. This hypothesis essentially considers whether the jurist Mucius Scaevola took part in the drafting of this *lex*. The Italian scholar himself not having developed this point¹, our paper must by nature be brief and largely based on hints rather than actual evidence. Even so, we believe it is worth considering what circumstantial evidence there might be of this jurist's work in a theoretical construct such as the *ius Latii*, which was so important for the later development of Roman civic foundations.

We are all aware of the decisive contribution of Luraschi's studies on the extension of citizenship at the end of the Republic, specifically from the last episode of the Social War. Therefore, if we take his work as a starting point, we are not doing anything that other authors are not doing. The study of Roman citizenship has come to be split into two parts, before and after Luraschi's work². On the other hand, as Barbati points out, Luraschi's studies on Roman citizenship came to question or simply challenge some of the conclusions reached at the time by Sherwin-White (1973)³.

Our aim is to understand, starting from Luraschi's assumptions, the ultimate meaning and the theoretical background of the concession

* This paper is part of the research project PID2019-105940GB-I00 "Nuevas bases documentales para el estudio histórico de la Hispania romana de época republicana: ciudadanía romana y latinidad (90 a.C. - 45 a.C.)" directed by Estela García Fernández of the Complutense University of Madrid.

¹ LURASCHI 1979, pp. 331-332: "La novità, dovuta certo al grande ingegno dei giuristi che vissero ed operarono nel primo decennio del I sec. a.C. (Quinto Mucio Scevola il pontefice?), fu che per la prima volta (o, più precisamente, per la prima volta in senso rigorosamente tecnico) al concetto di *Latinitas*, connesso con l'unità etnico-geografica del *nomen Latinum* e,

poi, con la deduzione effettiva di colonie latine, se ne sostituì uno nuovo, lo *ius Latii*, che ebbe la natura di condizione giuridica astratta, come tale estensibile a qualunque popolo ed a qualunque territorio".

² We shall essentially refer to LURASCHI 1976; Id. 1978 and Id. 1979.

³ BARBATI 2012, p. 1: "...dei profili giuridici della cittadinanza romana vengano ora ad occuparsi pressoché esclusivamente storici, per lo più di matrice anglosassone (...) Entrambi gli aspetti specialmente il secondo, sono fortemente stigmatizzati da Giorgio Luraschi". We have to admit that we do not understand Barbati's second comment and cannot afford to agree with it.

of the *ius Latii* from its origins, even assessing the few precedents that have been proposed for it. A precise understanding of this question, in our opinion, would clarify many of the problems that we shall have to face in later times, for example in the Flavian period⁴. In any way, the importance of this *lex Pompeia de Transpadanis* is decisive for understanding Roman politics in the provinces, the integration of the local elites and, in general, the conception and value of Roman citizenship, as well as the role that citizenship played in this integration until the beginning of the third century AD.

1. THE CONTEXT

As widely known, by virtue of the *lex Iulia* and the *lex Plautia Papiria* (90/89 BC) the *socii* were granted Roman citizenship. Shortly afterwards, *ius Latii* was granted to the Gallia Transpadana⁵. We have already pointed out, however, that this right had little to do with the status⁶ that the Romans had granted to the *Latini coloniarii*.

The *lex Pompeia de Transpadanis* raises all the questions that any statute concerning citizenship usually presents, and even more so in the case of a *lex* enacted at such a delicate period. As is well known, the problems increase if we take into consideration that we have not preserved the epigraph and that we owe most of the information we can rely on to a text by Asconius (*Pis.*, 3 Cl.).

Circa vers. LXXX

Hoc non ad contemnendam Placentiam pertinet unde se is ortum gloriari solet: neque enim hoc mea natura fert, nec municipi, praesertim de me optime meriti, dignitas patitur.

Magnopere me haesitare confiteor quid sit quae re Cicero Placentiam municipium esse dicat. Video enim in annalibus eorum qui Punicum bellum secundum scripserunt tradi Placentiam coloniam deductam pridie

Kal. Iun. primo anno eius belli, P. Cornelio Scipione, patre Africani prioris, Ti. Sempronio Longo coss. Neque illud dici potest, sic eam coloniam esse deductam quemadmodum post plures aetates Cn. Pompeius Strabo, pater Cn. Pompei Magni, Transpadanas colonias deduxerit. Pompeius enim non novis colonis eas constituit sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii, ut possent habere ius quod ceterae Latinae coloniae, id est ut petendo magistratus civitatem Romanam adipiscerentur. Placentiam autem sex milia hominum novi coloni deducti sunt, in quibus equites ducenti. Deducendi fuit causa ut opponerentur Gallis qui eam partem Italiae tenebant. Deduxerunt IIIviri P. Cornelius Asina, P. Papirius Maso, Cn. Cornelius Scipio. Eamque coloniam LIII . . . deductam esse invenimus: deducta est autem Latina. Duo porro genera earum coloniarum quae a populo Romano deductae sunt fuerunt, ut Quiritium aliae, aliae Latinorum essent. De se autem optime meritos Placentinos ait, quod illi quoque honoratissima decreta erga Ciceronem fecerunt certaveruntque in ea re cum tota Italia, cum de reditu eius actum est.

Asconius wonders which colony Cicero is referring to when he mentions Placentia⁷. In this context he alludes to the *lex Pompeia de Transpadanis*. The information he conveys to us is circumstantial from his point of view, but our main source for the content of the *lex*. As we all know, other sources provide us with a few supplementary details (STRAB. 4, 1, 12; APP., *B. Civ.*, 2, 26) and others (CIC., *Att.*, 14, 2, 1; PLIN., *Nat.*, 3, 30, 3; TAC., *Ann.*, 15, 32) with very little further information.

To these meagre literary texts, we must add, of course, a wide range of epigraphic sources. But, despite this extensive body of documentation, there is far from a consensus among researchers on central issues concerning the *ius Latii*: the municipalising capacity of the this right, the status of the population (*Latinus / peregrinus*), the function of these pieces of legislation, not to mention the very existence of the provincial Latins, which has been occasionally questioned⁸.

It is also common knowledge, that even the name of the *lex Pompeia de Transpadanis* is a re-

⁴ GARCÍA FERNÁNDEZ 2001, pp. 13-14.

⁵ WIEACKER 1988, p. 371.

⁶ SALMON 1969, pp. 85-87.

⁷ On Placentia, established in 218 BC, see GARCÍA FERNÁNDEZ 2023, p. 23, and nt. 5.

⁸ GARCÍA FERNÁNDEZ 1998, pp. 209-210.

construction of modern historiography, starting from the already mentioned sources and, consequently, that its content is open to much doubt. That is why Luraschi considers that, taking into account the characteristics of this statute and its actual scope of application, perhaps the name *lex Pompeia de Gallia Citeriore* would be more appropriate⁹.

If Luraschi's excellent contribution is notable for anything, it is for having assessed the whole context of the *ius Latii*, including the archaeological evidence¹⁰, which allows him to evaluate the actual impact of this measure. It can be said that in general the excavation data continue to support Luraschi, in the sense that no major population displacements are detected in Gallia Transpadana, and when they are detected (a point on which Bandelli has insisted in his critique¹¹) they can be explained by very specific political reasons.

The *ius Latii*, as such is a creation of 89 BC for which some precedent has been pointed out¹², but in general its original and creative nature can be highlighted, with great constitutional significance as far as the assimilation of the elites in the Roman Empire is concerned.

As pointed out above, if the establishment of earlier colonies involved the *deductio* of population and processes such as *centuriatio*, we find nothing similar in the colonies of Transpadana, apart from exceptions based on specific political interests. One of these exceptions, the most significant, is that of the second land registry of Verona (*AE* 2016, 534a = *EDR*163203). Although this new finding has been argued against Luraschi's thesis, it does not seem that the drawing up of a cadastre implied a survey

restructuring of the territory, but only the control of the landowners¹³.

As García Fernández pointed out¹⁴, when Rome grants the *ius Latii* to a community, apart from offering its most highly qualified population the possibility of access to Roman citizenship (in fact, the only characteristic on which the sources repeatedly insist), it will also recognise that the local customs that regulate relations within the civic community are in accordance with the law.

In any case, the discovery of the so-called Verona B cadastre has qualified what scholars had taken for granted, although Luraschi's theory is still generally accepted. This inscription, dated before 49 BC, when Roman citizenship was granted to the region, shows that the Roman public authorities had already intervened in the territory. In other words, although there had been no population displacement, the territory had begun to adapt to the parameters of a Roman colony, for example as far as a cadastre is a basis to establish a census¹⁵. This census, of course, could have a political content for access to local magistracies, military or even taxation. The special characteristics of this cadastre, however, make it difficult to assimilate it to other previously known¹⁶.

After all, being able to make use of one's own laws and rights was one of the outstanding characteristics of the *municipium*:

GELL. 16, 13, 6: *Municipes ergo sunt cives Romani ex municipiis legibus suis et suo iure utentes, muneris tantum cum populo Romano honorari participes, a quo munere capessendo appellati videntur, nullis aliis necessitatibus neque ulla populi Romani lege adstricti, nisi in quam populus eorum fundus factus est.*

⁹ LURASCHI 1976, p. 156. Other alternatives have been proposed, e.g., TAYLOR 1960, p. 345 prefers to call it *lex Pompeia (Strabonis) de coloniis Latinis*.

¹⁰ CAPOGROSSI COLOGNESI 2020, p. 164.

¹¹ BANDELLI 1996; ID. 2017, p. 53.

¹² BADIEN 1958, pp. 299-300; SHERWIN-WHITE 1973, pp. 159-160. These scholars believe that the proposal of Gracchus in 122 BC implied the granting of Roman citizenship to *Latini* and *ius suffragii* to Italics and could be a precedent for this right. This *ius suffragii* obviously implies a Latin status: on this point, see GARCÍA FERNÁNDEZ 2001, p. 23.

¹³ CAVALIERI MANASSE 2004, pp. 54-57; MAGANZANI 2015, pp. 94-98.

¹⁴ GARCÍA FERNÁNDEZ 1998, p. 220.

¹⁵ We owe the *editio princeps* of the second Verona cadastre to CAVALIERI MANASSE – CRESCI MARRONE 2015 (= *AE* 2016, 534a; *EDR*163203); *EAED.* 2017; MAGANZANI 2015; *EAD.* 2017; GARCÍA FERNÁNDEZ 2023, p. 24. See also the study by Fulvia Mainardis in this volume.

¹⁶ CAVALIERI MANASSE 2004, pp. 54-57. This scholar cites the Orange cadastre as an example and points out several differences, such as the fact that this one, unlike the Verona cadastre, reproduces a partition of land carried out centuries earlier. It is not possible, in the case of Verona, to define the size of the centuries and empty centuries appear, which is not the case in Orange. In short, in the Verona cadastre we do not find a definition of the nature and legal status of the estates, which is what Hyginus gromaticus (*CAR*, IV I, 1967 L) requires.

It should be remembered that the emergence of this new *ius Latii* came after the foundation of the last Latin colonies in Italy (Aquileia 183–181 BC and Luca 180 BC), and that this status is in no way parallel to the that of the *Latini* in the colonies during the Republican era. We are discussing an institution that requires very refined legal thinking.

With these new *coloniae*, a practice that had begun in 334 BC with the foundation of Cales, followed by another twenty-seven *deductiones* of a similar legal nature came to an end. The interruption of this practice is in direct relation with the new part played by the colonies under Roman law, starting from the deduction of Mutina, Parma and Saturnia¹⁷.

Luraschi, relying on Heurgon¹⁸, claims that Latin colonies are, in fact, very similar to *municipia*. The basis of this criticism is decisive, because until then it had been assumed that from 89 BC onwards colonies had been materially established (by means of *deductio*) in Transpadana. According to Luraschi, this *deductio* would in fact be the mere attribution of the title of colony, without any recourse to the rituals of foundation. Naturally, this also meant that there was no constitutional restructuring of the indigenous communities raised to Latin status¹⁹. There was therefore no real ‘*deducti*’, i.e. real population displacement. That is why Luraschi talks about fictitious colonies (“*colonie latine fittizie*”²⁰). This type of colonisation also took place in Hispania and later in Narbonne Gaul²¹.

This ‘fictitious’ way of setting up colonies (if we accept Luraschi’s terminology), however, did not make the traditional system of colonial *deductio* disappear, but was to survive for some

time yet, as is shown for example by the case of Novum Comum in 56 BC founded by Caesar in the framework of a *lex Vatinia*, not to be confused with Comum, a ‘fictitious’ colony founded by Pompey²². It is rather significant that from the time of Augustus onwards, we do not find any new Latin *colonia*, either real or fictitious, although the latter continued to some extent in the only under a new title, that of *municipium*.

We know that the decisive element of this new status is the possibility of acquiring Roman citizenship by virtue of having exercised certain magistracies, specifically at the end of having held them, not at the beginning. This right was so representative that Asconius is the element that stands out in referring to the *ius Latii*. As Gagliardi has shown, Asconius’ focus on this right does not mean that the inhabitants of these colonies lacked the others (*suffragium*, *commercium*, *conubium*). Asconius simply highlights that privilege which best characterises the institution in his time, and which shall best characterise it in the following century.

To summarise, on the rights side the picture was as follows: according to Gagliardi, until 338 BC the *Latini coloniarii*, as inhabitants of colonies founded by Roman citizens and *Latini prisci*, enjoyed *commercium* and *conubium*, already established by the *Foedus Cassianum*. Later, in 122 BC, *Latini prisci* and *coloniarii*, if they resided in Rome, by virtue of a *plebiscitum*, whose bill was submitted by Gaius Gracchus²³, were granted the *suffragium*. Thus, it does not seem that from 89 BC onwards it is correct to speak of the existence of an abstract *civitas Latina* common to all the cities that have been granted the *ius Latii*, but rather that this right materialises in specific

¹⁷ On *tabula Heracleensis* 1–63 and in support of a pre-Sullan chronology of the Cisalpine Gaul, which we consider controversial, see SISANI 2016. On the above mentioned last Latin colonies, see SISANI 2018, p. 332.

¹⁸ LURASCHI 1979, pp. 165–166; HEURGON 1967, p. 42. On the I Eclogue, see the recent commentary by CUCCHIARELLI 2023, pp. 59–110, esp. 59–75.

¹⁹ LURASCHI 1979, pp. 165–166: “A meno di ritenere (e la cosa potrebbe non meravigliare) che la deduzione delle colonie transpadane fosse semplicemente consistita nell’attribuzione formale del titolo di colonia al centro indigeno, senza ricorso alcuno ai complessi rituali gromatici di fondazione e, soprattutto, senza alcuna ristrutturazione costituzionale e territoriale”.

²⁰ See e.g. LURASCHI 1979, p. 164. GAGLIARDI 2023a, p. 69

prefers, paraphrasing Asconius’ words, to talk about ‘colonie latine *sine novis colonis*’.

²¹ As a matter of fact, the *ius Latii* spread throughout the western provinces of the Roman Empire (except Britannia), specifically Gallia Cisalpina, Gallia Narbonensis, Hispania, Gallia Comata, the Alpine districts, Germania, and the African and Danubian provinces, see KREMER 2006, pp. 121; 150–164 and 180–188; GAGLIARDI 2023b, p. 149, and n. 4.

²² LURASCHI 1979, pp. 103–137; GARCÍA FERNÁNDEZ 1998, p. 215, and nt. 12.

²³ APP., *B.Cin.*, 1, 23, 99; PLUT., *C. Gracch.*, 9, 3. On this issue and how it has been dealt with in the literature, see GAGLIARDI 2023b, pp. 151–152, nt. 11.

citizenships, which, apart from the rights they share, each has its own peculiarity.

2. TWO CITIZENSHIPS?

In this conceptual framework, the possibility that this new status created by the *ius Latii* was the work of the jurisprudence of the time is in our opinion more than likely. We have already referred to the complexity that legal discourse must have reached in order to coin such a complex notion as the one we are analysing.

The key to understanding the novelty of the *ius Latii* in the *lex Pompeia de Transpadanis* concerning these two citizenships is that two citizenships in colonies founded according to the traditional way, were in themselves incompatible, since *coloniae* were considered as independent bodies. The *Latini coloniarii* had to renounce Roman citizenship and had no means of regaining it as long as they were part of the *colonia* in which they lived and of which they were citizens. This fact is proven by several sources, both legal and literary.

Among the legal sources you should pay attention to Gaius (*Inst.*, 1, 131), who talks about the past (*olim*):

Olim quoque, quo tempore populus Romanus in Latinas regiones colonias deducebat, qui iussu parentis in coloniam Latinam nomen dedissent, desinebant in potestate parentis esse, quia efficerentur alterius civitatis cives.

According to Gaius, a son who becomes a citizen of a colony with paternal consent, ceases to be under the *patria potestas* because he is already a citizen of another city. This, expressed, as we have noted, in the past tense, refers to the Latin colonies prior to the *lex Pompeia*, no doubt, because of the verb *deducere* (*quo tempore populus Romanus in Latinas regiones colonias deducebat*). What is relevant in this statement is that the

filius familias becomes free, since he is considered a member of another community, which implies that the father loses the rights over his son that Roman citizenship granted him. It is not surprising, as we know, that Gaius provides us with historical data that other jurists tend to avoid. Indeed, Gaius himself explains that the *Latini coloniarii* were considered foreigners (*peregrini*) by the *lex Minicia* (GAIVS, *Inst.*, 1, 79). The jurist specifies that this is because the text of the statute referred to those *Latini* who had their own cities, i.e. the *Latini coloniarii*.

García Fernández rightly refers to the *lex Acilia de repetundis* as testimony to the fact that the *coloniarii* were considered *peregrini*. The text deals with the rights of a defendant charged with the offence of extortion²⁴. We quote according to Crawford's edition:

§ 78 *nihilum rogato. vvvvvv de provocation[e vocation]eque danda. vñc sei quis eorum, qui [???(eivis) R(omanus) ex h(ace) l(ege) fieri nolet, qui eorum in civitate Latina Hvir consul??? dicta]tor^w praetor aedilisve non fuerint, ad praetorem, quoniam ex hac lege quaestio erit, ex h(ace) l(ege) alteri nomen detulerit et is eo iudicio h(ace) l(ege) condemnatus erit, tum, qui eius nomen detulerit, quoniam eorum opera maxime is condemnatus erit, ei provocatio vocatioque esto vocatioque]*²⁵

Those who had not received Roman citizenship according to this statute (or who have not really wanted to give up being *Latini*) would be granted rights that would compensate them for their inferior status, such as the *provocatio ad populum*, but this is precisely proof that the *Latini coloniarii* could not be Roman citizens at the same time.

It is essential to understand the change that the *ius Latii* meant and its presence in the *municipium*. The precedent situation contrasts sharply with the normality with which, from 89 BC onwards, a Latin community was allowed to produce its own Roman Citizens²⁶. As García

²⁴ SANTALUCIA 1987, pp. 188-189.

²⁵ CRAWFORD 1996, p. 74, n. 1.

²⁶ GARCÍA FERNÁNDEZ 1998, p. 218: "Contrasta en gran manera esta situación con la naturalidad con la que se admite a partir del año 89 a.C. que una comunidad latina genere sus propios ciudadanos romanos. Este hecho que jurídicamente está lejos de ser irrelevante, sólo pudo haber sido posible a

mi juicio tras el cambio del concepto mismo de latinidad que venimos defendiendo, de tal manera que a partir de la guerra Social el derecho latino ya no generará ciudadanía independientes y soberanas susceptibles de ser intercambiadas con la romana en caso de *migratio Romam*, como lo eran la ciudadanía placentina o cremonense".